

RESOLUCIÓN AE N° 071/2010
TRÁMITE N° 351
La Paz, 15 de marzo de 2010

TRÁMITE: Recurso de revocatoria presentado por la empresa Electricidad de La Paz S.A. (ELECTROPAZ) contra la Resolución AE N° 287/2009 de 23 de noviembre de 2009, que declara improbada la comisión de infracciones de parte de la Empresa Rural Eléctrica de La Paz S.A. (EMPRELPAZ), dentro del proceso de controversia iniciado por ELECTROPAZ.

SÍNTESIS RESOLUTIVA: Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por ELECTROPAZ contra la Resolución AE N° 287/2009; y por tanto, confirmar en todas sus partes el acto impugnado.

VISTOS:

El recurso de revocatoria interpuesto por ELECTROPAZ mediante memorial recibido el 14 de diciembre de 2009, contra la Resolución AE N° 287/2009 de 23 de noviembre de 2009, que declara improbada la comisión de infracciones de parte de la EMPRELPAZ, dentro del proceso de controversia iniciado por ELECTROPAZ; el Decreto N° 1250 de 16 de diciembre de 2009, a través del cual se tiene por apersonado al representante legal de ELECTROPAZ y se solicita información a la ex Dirección de Mercado Eléctrico Minorista; el memorial de la referida empresa, presentado el 28 de diciembre de 2009, mediante el que ratifica y complementa su recurso de revocatoria; el Decreto N° 1307 de 30 de diciembre de 2009 mediante el que se considera el referido memorial y se requiere informe de la Dirección señalada; el Auto DLG/01-10 de 26 de enero de 2010 que dispone la apertura de un término de prueba y la ejecución de una inspección administrativa; el Acta de Inspección Administrativa; el memorial presentado por ELECTROPAZ el 08 de febrero de 2010 por el que ratifica sus argumentos, pruebas y antecedentes; el Auto DLG/15-10 de 11 de febrero de 2010 que dispone la clausura del término de prueba; la nota EMPZ G.G. 44/2010 de 19 de febrero de 2010 por la que EMPRELPAZ ofrece pruebas; el Decreto DLG/43-10 de 22 de febrero de 2010 que tiene por adjuntada la prueba ofrecida; la nota EMPZ G.G. 52/2010 de 23 de febrero de 2010 por la que EMPRELPAZ solicita que su prueba se tenga presente; el Decreto DLG/53/2010 de 22 de febrero de 2010 que dispone tener presente el último Decreto emitido; el memorial presentado por ELECTROPAZ el 02 de marzo de 2010 mediante el que solicita la consideración de argumentos; el Decreto DLG/67-10 de 4 de marzo de 2010 que determina que el memorial señalado se tendrá presente; el informe AE DPT N° 123/2010 de 08 de marzo de 2010 emitido por la Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones, todo lo que convino ver, tener presente y

CONSIDERANDO: (Antecedentes)

Que mediante Resolución AE N° 287/2009 de 23 de noviembre de 2009, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) declaró infundada la reclamación de controversia interpuesta por ELECTROPAZ en contra de EMPRELPAZ, respecto a la prestación del suministro de electricidad en el sector denominado Distrito Municipal 7 de la ciudad de El Alto; por tanto, declaró improbadas las infracciones tipificadas en los incisos a) y af) del Artículo 22 del Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) atribuidas en contra de EMPRELPAZ.

RESOLUCIÓN AE N° 071/2010, 1/13

RESOLUCIÓN AE N° 071/2010

TRÁMITE N° 351

La Paz, 15 de marzo de 2010

Que, la referida Resolución fue debidamente notificada a ambas partes el 30 de noviembre de 2009; consiguientemente, ELECTROPAZ presentó el memorial de 04 de diciembre de 2009 solicitando aclaración y complementación a la Resolución señalada, por lo que se emitió el Decreto N° 1149 de 4 de diciembre de 2009 a través del que se tuvo por presentada la solicitud de la empresa y se requirió informe al respecto a la ex Dirección de Mercado Eléctrico Minorista, la cual emitió el informe AE DMN N° 160/2009 de 10 de diciembre de 2009.

Que, en tal sentido, se pronunció el Auto N° 297 de 11 de diciembre de 2009 que declaró procedente la solicitud de aclaración presentada por ELECTROPAZ de conformidad a los términos del informe de referencia (el cual estableció que esta empresa inició el proceso de controversia, señalando distintas urbanizaciones y adjuntando un plano en el que muestra que dichas zonas se encuentran ubicadas dentro de la zona de sobreposición; por lo que aclaró que ELECTROPAZ en ningún momento detalló las coordenadas individuales de las urbanizaciones de referencia, por lo que se asumió que todos los sectores y urbanizaciones del Distrito 7 de la ciudad de El Alto se encontrarían dentro de la zona de sobreposición presentada en los planos de la empresa. Además, indicó el informe, como esta empresa no precisó coordenadas, se consideró que las mismas se encontrarían dentro del polígono sobrepuesto).

Que, mediante memorial de 14 de diciembre de 2009, ELECTROPAZ interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución AE N° 287/2009 de 23 de noviembre de 2009, solicitando que se revoque la misma y se declare fundada la reclamación de controversia entre operadores interpuesta contra EMPRELPAZ, respecto a la prestación del suministro de electricidad dentro de la zona de Concesión de ELECTROPAZ y en consecuencia declare probadas las infracciones tipificadas en los incisos a) y af) del Artículo 22 del RIS de parte de EMPRELPAZ, imponiendo las sanciones correspondientes.

Que, por tal motivo, la AE mediante Decreto N° 1250 de 16 de diciembre de 2009, tuvo por apersonado al representante legal de la empresa recurrente y determinó que la ex Dirección de Mercado Eléctrico Minorista informe al efecto.

Que, posteriormente, ELECTROPAZ presentó el memorial de 28 de diciembre de 2009 mediante el cual ratificó y complementó el recurso de revocatoria interpuesto (dentro del plazo de diez días de notificado el Auto N° 297 de aclaratoria de la Resolución impugnada), por lo que se pronunció el Decreto N° 1307 de 30 de diciembre de 2009, que tuvo por ratificado y complementado el recurso interpuesto, disponiendo que la ex Dirección de Mercado Eléctrico Minorista informe sobre el particular.

Que, en atención a los hechos expuestos en el recurso de revocatoria, se dispuso la apertura de un periodo de prueba de diez (10) días hábiles administrativos mediante Auto DLG/01-10 de 26 de enero de 2010, dentro del cual se instruyó la ejecución de una inspección administrativa a efectos de verificar el argumento de ELECTROPAZ sobre la supuesta invasión en su zona de Concesión.

RESOLUCIÓN AE N° 071/2010, 2/13

Que, una vez efectuada la señalada inspección en la urbanización Bautista Saavedra - C, se emitió el Acta respectiva que evidenció la existencia de 7 postes de Media Tensión de propiedad de EMPRELPAZ y de un cruce aéreo de red de Media Tensión de esta misma empresa, que rompe la distancia de seguridad que debe existir entre instalaciones, indicando que dicho cruce se encuentra en el primer poste de Media Tensión que se inspeccionó en el lugar.

Que, mediante memorial de 08 de febrero de 2010, ELECTROPAZ ratificó sus argumentos, pruebas y antecedentes; consiguientemente, se emitió el Auto DLG/15-10 de 11 de febrero de 2010 que tuvo por presentado el memorial de referencia y determinó la clausura del respectivo periodo probatorio, disponiendo que la Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones informe al respecto.

Que, el 19 de febrero de 2010, EMPRELPAZ presentó la nota EMPZ G.G. 44/2010, mediante la que ofreció pruebas para su consideración, situación que generó la emisión del Decreto DLG/43-10 de 22 de febrero de 2010 que tuvo por adjuntada tal documentación. Asimismo, la mencionada empresa remitió la nota EMPZ G.G. 52/2010 de 23 de febrero de 2010 solicitando que se tenga presente la prueba presentada en su anterior nota, por lo que se emitió el Decreto DLG/53-10 de 22 de febrero de 2010, que determinó que EMPRELPAZ debe considerar el Decreto DLG/43-10.

Que, EMPRELPAZ, presentó otro memorial el 02 de marzo de 2010 mediante el cual solicita la consideración de argumentos al momento de emisión de la resolución que resuelva el recurso de revocatoria interpuesto, situación que originó la emisión del Decreto DLG/67-10 de 4 de marzo de 2010 que determinó que el memorial señalado se tendrá presente

Que, finalmente, la Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones emitió el informe AE DPT N° 123/2010 de 08 de marzo de 2010, mediante el cual efectuó el análisis técnico respectivo

CONSIDERANDO: (Fundamentación legal)

Que, el parágrafo I del Artículo 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341 establece que los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, siempre que dichos actos administrativos a criterio de los interesados afecten, lesionen o pudieren causar perjuicio a sus derechos subjetivos e intereses legítimos.

Que, el Artículo 64 de la referida Ley establece que el recurso de revocatoria deberá ser interpuesto por el interesado ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución impugnada, dentro del plazo de diez (10) días siguientes a su notificación

Que, asimismo, el Artículo 89 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE (aprobado mediante Decreto Supremo N° 27172), establece que el recurso de revocatoria será resuelto desestimándolo, aceptándolo o rechazándolo.

La Paz, 15 de marzo de 2010

Que, el Artículo 138 del Decreto Supremo N° 29894 dispuso, entre otros, la extinción de la Superintendencia de Electricidad. En tal sentido, se aprobó el Decreto Supremo N° 0071, el cual, en el Artículo 3° determinó la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE, estableciendo que las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las ex Superintendencias Sectoriales serán asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social en lo que no contravenga a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado; por lo que, siendo que las normas expuestas no contradicen a la misma, corresponde su aplicación al presente caso de análisis.

CONSIDERANDO: (Análisis de los agravios expuestos por la empresa recurrente)

Que, como se expresó anteriormente, ELECTROPAZ, a través del memorial de 14 de diciembre de 2009, presentó recurso de revocatoria contra la Resolución AE N° 287/2009 de 23 de noviembre de 2009, el cual fue objeto de ratificación y complementación mediante memorial de 28 de diciembre de 2009 y memorial de 08 de febrero de 2010. En tal sentido, a continuación se analizan los argumentos presentados por la referida empresa a efectos de su pertinente consideración y análisis.

1. **Validez y eficacia del Auto N° 4819.** Al respecto, ELECTROPAZ señala que la AE, en la Resolución objeto de impugnación, estableció que el citado Auto reúne las condiciones esenciales previstas en el Artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), por lo que constituye un acto administrativo válido y existente en el ámbito del Derecho; sin embargo, según establece la recurrente, de acuerdo al procedimiento de actualización establecido en los Artículos 54 y 55 del Reglamento de Concesiones, Licencias y Licencias Provisionales (RCLLP), aprobado mediante D.S. 24043, para la actualización de una zona de Concesión se requiere el dictado de una Resolución, procedimiento que según menciona es aplicable para la actualización del área de operación de las empresas en adecuación, empero – señala– el Auto N° 4819 no tiene la forma de una Resolución Administrativa y en consecuencia aún no ha nacido a la vida del derecho. Además, manifiesta la recurrente, el Artículo 28 de la LPA establece como uno de los elementos esenciales del acto administrativo, el procedimiento esencial y sustancial y los que resulten aplicables, y en este caso el procedimiento para la actualización se encuentra establecido en el RCLLP.

Respecto a lo expresado por ELECTROPAZ, se debe considerar que el Artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, describe los elementos esenciales que debe contener todo acto administrativo, tales como competencia, causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad, aspectos que claramente contiene el Auto N° 4819, por cuanto no fue emitido por una autoridad incompetente, expresa claramente la causa y objeto del mismo, tiene un fundamento y una finalidad. Con relación al procedimiento, igualmente fue considerado, por cuanto, antes del pronunciamiento del Auto, se cumplieron procedimientos esenciales y sustanciales (situación que debe ser previa a la emisión del acto conforme establece la indicada disposición legal). Por tanto, el Auto N° 4819 reúne los elementos esenciales que debe contener todo acto administrativo y consiguientemente ha nacido a la vida del Derecho lo que

implica que es plenamente válido y eficaz conforme lo determina la Resolución impugnada.

Acerca de que los Artículos 54 y 55 del RIS disponen que se debe emitir una Resolución Administrativa para efectos de actualización de la zona de concesión y no un Auto, se observa que ELECTROPAZ, para este efecto, considera a las empresas con contrato de adecuación, en igualdad de condiciones que una empresa que cuenta con Concesión. Por otra parte se debe tener presente que, de conformidad al inciso g) del Artículo 4 de la LPA, la actividad administrativa de la AE se encuentra sometida al principio de legalidad y presunción de legitimidad que establece que las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario; situación que concuerda con el Artículo 27 de la LPA que determina que todo acto administrativo es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo.

Por tanto, el Auto N° 4819 es plenamente válido y eficaz siendo que se presume su legitimidad hasta que no se demuestre lo contrario, situación ya mencionada en la Resolución objeto de recurso, por lo que, para el presente análisis, resulta irrelevante considerar si el RCLLP requiere la emisión de una Resolución Administrativa en lugar de otro acto administrativo.

2. **Jerarquía normativa.** Sobre el particular, la empresa recurrente establece que es necesario considerar la jerarquía normativa que determina la Constitución Política del Estado (CPE), en el Artículo 410. Esta jerarquía, según menciona, se encontraría igualmente determinada en la Sentencia Constitucional 0058/2006 y que por tanto, no es coherente que cuando la propia normativa establece la jerarquía de un instrumento para otorgar un derecho o exigir una obligación, se emita otro instrumento de menor jerarquía.

Respecto al argumento expuesto por ELECTROPAZ, se debe considerar que el Artículo citado de la CPE no establece ningún orden jerárquico entre las Resoluciones Administrativas y los Autos administrativos (ambos actos administrativos), como manifiesta la recurrente, así como tampoco la Sentencia Constitucional expuesta por la misma, sino que establecen el orden jerárquico de otras disposiciones normativas. Además, el objeto de considerar la jerarquía normativa es la aplicación preferente de normas en caso de existir contradicción, situación no aplicable al presente análisis. Por lo que, el argumento de ELECTROPAZ al respecto, no tiene sustento jurídico alguno.

3. **Publicación del Auto N° 4819.** Al respecto, la recurrente manifiesta que la AE estableció que la publicación inoportuna e incompleta del Auto N° 4819 afectó a la eficacia del mismo, no pudiendo ser exigible a terceros, estableciendo además que la eficacia se vincula a su ejecutoriedad. Sobre el particular, indica que de acuerdo a la doctrina el acto que no ha sido notificado no produce efectos jurídicos inmediatos. Asimismo, señala que la Resolución objeto de impugnación establece que, si bien el Auto N° 4819 carece de eficacia respecto a terceros, es eficaz respecto a

EMPRELPAZ, afirmación que según indica la recurrente, no tiene sustento en la LPA y el principio de buena fe no puede sobreponerse al principio de sometimiento pleno a la Ley y al principio fundamental. Igualmente indica que la AE debió anular el Auto Nº 4819.

Con relación a estos argumentos de ELECTROPAZ, corresponde reiterar lo expuesto anteriormente, respecto a que, de conformidad al inciso g) del Artículo 4 de la LPA, la actividad administrativa se encuentra sometida al principio de legalidad y presunción de legitimidad; por tanto, las actuaciones de la AE se presumen legítimas por estar sometidas plenamente a la Ley, mientras no exista una declaración en contrario y además, de conformidad al Artículo 27 de la LPA, el Auto Nº 4819 es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume su legalidad como dispone la anterior disposición expuesta.

Al mismo tiempo, la recurrente debe tener presente que si bien el Auto no fue publicado con el Anexo correspondiente, como bien establece la Resolución AE Nº 287/2009, ELECTROPAZ ha adquirido pleno conocimiento del tal acto administrativo como manifestó durante la tramitación el proceso de controversia que generó la emisión de la Resolución objeto de impugnación y a través del memorial que contiene el recurso de revocatoria objeto del presente análisis, cumpliéndose de esta manera la finalidad de la notificación, que es el conocimiento del acto administrativo, circunstancia que habilitó a la empresa recurrente a utilizar los recursos de impugnación que le franquean las normas legales vigentes. Situación que concuerda con lo dispuesto por la Sentencia Constitucional 0139/2006-R de 06 de febrero de 2006, que manifiesta que *"... toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida. (...)"*.

Por otra parte, se debe tener presente que, de acuerdo al inciso e) del Artículo 4 de la LPA, es deber de la Administración Pública presumir la buena fe en su relación con los particulares, siendo que la confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos deben orientar el procedimiento administrativo. Por tanto, la AE se encuentra obligada a aplicar este principio en sus actuaciones, más aún si la misma ha emitido un acto administrativo (Auto Nº 4819) que permitió a EMPRELPAZ suministrar el servicio de electricidad en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto.

Con relación a que la AE debiera anular el Auto Nº 4819, el parágrafo IV del Artículo 36 de la LPA, dispone que las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en esa Ley; por tanto, siendo que el referido acto administrativo (Auto Nº 4819) no fue objeto de invocación de anulabilidad en ningún recurso administrativo que franquea la Ley a ELECTROPAZ o a otra empresa, no corresponde ni correspondía que la AE declare su anulabilidad. Además, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE (aprobado mediante D.S. 27172), los Superintendentes (actualmente el Director Ejecutivo de la AE para el

presente caso) podrán sanear o rectificar actos anulables, indicando que el saneamiento consistirá en la subsanación de vicios que presenta el acto y la rectificación consistirá en la corrección de errores materiales y/o aritméticos presentes en el acto. Empero, en el presente caso, por lo señalado, el Auto N° 4819 no contiene ningún vicio por cuanto cumple con las determinaciones del Artículo 28 de la LPA y no tiene errores materiales y/o aritméticos, por lo que no corresponde sanear ni rectificar este acto administrativo.

Por lo señalado, se advierte que la empresa recurrente no desvirtuó los alcances de la Resolución impugnada al respecto.

4. Derecho que le asiste a EMPRELPAZ para ejercer la actividad de distribución.

Sobre este aspecto, ELECTROPAZ indica que la Ley de Electricidad tiene preeminencia en cuanto a su aplicación por jerarquía normativa y especialidad indicando que la Concesión es el único derecho que por mandato de la mencionada Ley habilita formalmente a alguien a ejercer la actividad de Distribución de electricidad. De esta manera, la empresa recurrente indica que la misma es Titular de una Concesión que la habilita legalmente a ejercer la industria eléctrica y que mediante Resolución SSDE N° 157/2007 de 15 de mayo de 2007 se realizó la última actualización de su zona de concesión. Además, señala que la figura del Contrato de Adecuación fue creada mediante D.S. 26299 y que de ninguna forma puede ser considerada como un título habilitante. También menciona que el Decreto establece esta figura como una medida de excepción para permitir que los que ejercen la actividad de Distribución sin ser Titulares de una Concesión se adecuen al marco legal vigente. Por lo que, establece que EMPRELPAZ no tiene un derecho otorgado lo contrario significa desconocer la Ley de Electricidad y su jerarquía normativa, por lo que la AE, según menciona, no habría analizado jurídicamente los argumentos de ELECTROPAZ en la Resolución objeto de impugnación.

Respecto a las consideraciones expuestas por la recurrente en este punto, se debe analizar el D.S. 26299, el cual, en el Artículo Segundo, establece que el Contrato de Adecuación a la Ley de Electricidad permite a la Superintendencia de Electricidad (actualmente a la AE por disposición del D.S. 0071) cumplir la función de regulación sobre las personas individuales o colectivas que hasta la fecha de promulgación del Decreto no son Titulares de una Concesión en el marco de la Ley de Electricidad y se dedican a la actividad de distribución en sistemas con una máxima potencia demandada anual superior a 500 KW dentro del Sistema Interconectado Nacional o como Sistema Aislado; observándose que el objeto de la norma mencionada es la de regular a personas individuales o colectivas que ejercían la actividad de Distribución con una determinada potencia demandada y que prestaban el servicio sin contar con derechos para el efecto. La regulación tiene fundamento en la protección de los derechos de los consumidores, atribución otorgada al presente a la AE por el inciso a) del Artículo 12 de la Ley de Electricidad; por tanto, de ninguna manera se puede afirmar que este órgano regulador desconoce esta Ley, mas bien la aplica en su integridad.

En este ámbito se advierte que no opera la aplicación de la jerarquía normativa de la Ley de Electricidad frente al D.S. 26299, por cuanto no norman aspectos contradictorios, en mérito a que el Decreto de referencia tiene como destinatarios del mismo a las personas individuales o colectivas que estaban ejerciendo la actividad de distribución sin contar con una Concesión; por tanto, que se encontraban en condiciones distintas a las reguladas por la Ley de Electricidad. Por lo que, el Decreto Supremo 26299 es plenamente aplicable y sustenta el derecho de EMPRELPAZ de ejercer la actividad de distribución en el área de operación determinada.

Cabe resaltar que ELECTROPAZ, como se manifestó anteriormente, en su memorial de recurso de revocatoria señala que no corresponde reconocer el derecho de EMPRELPAZ para ejercer la actividad de distribución al ser Titular de un Contrato de Adecuación y no de una Concesión, empero, de manera contradictoria, en los primeros argumentos del mismo memorial reconoce este derecho para efectos de aplicación del procedimiento de actualización de zonas de Concesión establecido en el RCLLP, evidenciándose la contradicción en sus argumentos.

Por lo señalado, se advierte que la AE, en la Resolución impugnada, analizo los argumentos jurídicos esgrimidos por ELECTROPAZ expuestos en este punto, determinando que EMPRELPAZ cuenta con un derecho reconocido para el ejercicio de la actividad de Distribución; sin embargo, la empresa recurrente no desvirtuó las consideraciones de la AE al respecto en la Resolución objeto de impugnación.

- 5. Modificación o revocación del Auto N° 4819, a través de la emisión de la Resolución SSDE N° 157/2007.** Según señala ELECTROPAZ, a través del informe AE DMN N° 137/2009 de 19 de noviembre de 2009, la (ex) Dirección de Sistemas Aislados y la (ex) Dirección de Mercado Eléctrico Minorista de la AE, informaron de la existencia de áreas sobrepuestas dentro de algunas urbanizaciones del Distrito 7 de El Alto, indicando que el problema de delimitación se remonta a anteriores actos del regulador; sin embargo, según establece la recurrente, el análisis cronológico respecto a este problema, contenido en el informe de referencia, resulta intrascendente, toda vez que el regulador al disponer que el Distrito 7 de la ciudad de El Alto se encuentra en la zona de concesión de ELECTROPAZ mediante Resolución Administrativa SSDE N° 157/2007 de 15 de mayo de 2007 ha modificado y/o revocado cualquier otra determinación y/o Resolución anterior.

Respecto a la revocación de un acto administrativo, se debe considerar que de acuerdo a la LPA y al Reglamento de esta Ley para el SIRESE (aprobado mediante D.S. 27172), esta figura es emergente únicamente de los recursos de revocatoria o jerárquicos que se interpongan; por tanto, la emisión de la Resolución SSDE N° 157/2007 de ninguna manera podría haber revocado determinaciones del Auto N° 4819; siendo que no resuelve ningún recurso administrativo.

Con relación a la modificación del citado Auto, que habría sido efectuada al haberse emitido la Resolución Administrativa SSDE N° 157/2007, se debe considerar

nuevamente lo expuesto, respecto a que todo acto administrativo es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo, según expresa determinación del Artículo 27 de la LPA, el cual concuerda con el inciso g) del Artículo 4 de la LPA) que establece que las actuaciones de la Administración Pública, por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario. Estas determinaciones se encuentran igualmente sustentadas en el parágrafo I del Artículo 59 de la LPA, por cuanto, ni la interposición de cualquier recurso puede suspender la ejecución del acto impugnado.

Por tanto, el Auto N° 4819, aún en caso de emisión de la Resolución de referencia, se presume legítimo y es de obligatorio cumplimiento, salvo que exista una declaración judicial expresa; por lo que no sería admisible la existencia de una modificación tácita del Auto de referencia como erróneamente pretende la empresa recurrente.

6. **Respecto a la comisión de la infracción de parte de EMPRELPAZ, prevista en el inciso a) del Artículo 22 del RIS (incumplir disposiciones del regulador).** Al respecto, la recurrente indica que la Resolución SSDE N° 157/2007 (que determinó la actualización de su zona de concesión) ha sido emitida conforme a procedimiento y ha sido debidamente publicada, por lo que es un acto vigente, por cuanto EMPRELPAZ ni ningún otro tercero ha impugnado dicha Resolución y por tanto, esta empresa únicamente ha confirmado el hecho de haber invadido su zona de concesión, por lo que resulta evidente que EMPRELPAZ ha incurrido en la comisión de la infracción.

Sobre este punto, se evidencia que no existe incumplimiento a la Resolución señalada de parte de EMPRELPAZ, por tanto a disposiciones del órgano regulador, en mérito a que la misma cuenta con un Derecho otorgado a través del Auto N° 4819 para operar en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto, el cual, como se determinó anteriormente, es válido, eficaz y se presume legítimo, por tanto es de cumplimiento obligatorio para EMPRELPAZ, aun en el caso de que esta empresa hubiere impugnado la Resolución de referencia. Por lo que, el argumento de ELECTROPAZ expuesto al respecto no tiene sustento.

7. **Respecto a la comisión de la infracción de parte de EMPRELPAZ, contenida en el inciso a) del Artículo 22 del RIS.** Sobre el particular, ELECTROPAZ indica que esta infracción no sólo se refiere al suministro de electricidad sino también al hecho de actuar con exceso de facultades, poderes o atribuciones con desdén, perjuicio, daño o agravio a intereses ajenos, hechos en los que claramente EMPRELPAZ ha incurrido con su conducta a prestar el servicio de suministro de electricidad en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto, sin derecho alguno, dañando los intereses y derechos de ELECTROPAZ y de sus consumidores y usuarios. Asimismo, indica que si bien no presentó documentación alguna que demuestre que EMPRELPAZ suscribió contratos de suministro con usuarios de ELECTROPAZ, como se manifestó en la Resolución impugnada, la reclamación de controversia en ningún momento versó sobre este hecho y además esta información no fue solicitada por el regulador

durante el proceso. La recurrente indica igualmente que la AE señaló que ELECTROPAZ no acreditó documentalmente la formulación de reclamos a EMPRELPAZ o al regulador, tendientes a evitar el tendido de líneas o construcción de otras instalaciones dentro del Distrito 7. Sobre este aspecto, la recurrente menciona que la normativa vigente no establece que en la reclamación de controversia deba presentarse documentación en la que se acredite la realización previa de reclamos, por lo que establece que no existen argumentos para establecer que EMPRELPAZ no incurrió en la infracción de referencia.

Con relación a estas manifestaciones de la empresa recurrente, se debe reiterar lo expuesto en la Resolución objeto de impugnación, en mérito a que EMPRELPAZ también fue autorizada por el ente regulador para prestar el servicio de suministro de electricidad en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto, por lo que no incurrió en la infracción descrita en el inciso af) del Artículo 22 del RIS. Además, durante la tramitación del proceso de controversia que generó la emisión de la resolución objeto de impugnación, la recurrente no presentó documentación alguna que acredite que EMPRELPAZ incurrió en tal infracción, no obstante a que dentro de tal proceso se emitió el Auto N° 9456 de 30 de marzo de 2009 que dispuso la apertura de término de prueba para que *"las partes del proceso produzcan prueba y presenten la documentación que consideren pertinente"*, situación que confirma que no se limitó el derecho de ELECTROPAZ a presentar documentación que acredite que EMPRELPAZ incurrió en la infracción mencionada, más aún si el parágrafo II del Artículo 46 de la LPA determina que en cualquier momento del procedimiento, los interesados podrán aportar documentos u otros elementos de juicio, los cuales serán tenidos en cuenta por el órgano competente a momento de la emisión de la correspondiente resolución.

Por tanto, se debe tener presente que EMPRELPAZ, no actuó con exceso de facultades, poderes o atribuciones, por cuanto adquirió un derecho para la prestación del servicio de distribución en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto y tampoco actuó con desdén, perjuicio, daño o agravio a los intereses ajenos o con abuso en el suministro de electricidad, sino que más bien dio cumplimiento al Contrato de Adecuación suscrito con la ex Superintendencia de Electricidad, el cual establece la obligación de prestar el servicio a los usuarios que lo soliciten, condición por la que debe velar la AE en atención a la determinación del inciso a) del Artículo 12 de la Ley de Electricidad que establece que es deber del ente regulador el proteger los derechos de los consumidores, lo contrario hubiera implicado que EMPRELPAZ, al considerar que ELECTROPAZ tenía un derecho preferente sobre el Distrito de referencia, deje de prestar el servicio a sus consumidores, los cuales hubieran tenido que efectuar nuevas solicitudes de servicio a ELECTROPAZ, realizando nuevos trámites y cancelando por importes que ya fueron cancelados a la otra empresa, lo que involucraría quedarse sin el suministro de electricidad por un periodo hasta que el otro Distribuidor lo brinde nuevamente, hechos que hubieran sido atribuidos a EMPRELPAZ y que en este caso se hubieran constituido en perjuicio para los consumidores. Además, se debe tener presente que ELECTROPAZ no demostró a

través de ninguna documentación que EMPRELPAZ ocasiono tales perjuicios, daños o agravios a intereses ajenos o con abuso en el suministro de electricidad.

En tal sentido, se advierte que ELECTROPAZ, respecto a lo expuesto, no desvirtuó los alcances de la Resolución objeto de impugnación.

8. En cuanto a los informes AE DMN N° 137/2009 y DMN 211/2008 que fundamentan la Resolución impugnada. La recurrente señala que la misma individualizó claramente las urbanizaciones y sectores del Distrito 7 de la ciudad de El Alto, reclamados en controversia, encontrándose entre éstos la urbanización Bautista Saavedra UVC, que fue otorgada en Concesión a ELECTROPAZ mediante actualización a través de la Resolución SSDE N° 142/2000 y SSDE N° 157/2007. En esta urbanización, según indica la recurrente, no existe sobreposición, por cuanto no se encuentra dentro del área de operación de EMPRELPAZ; sin embargo, en el lugar existen redes operadas por esta empresa, situación que no ha sido analizada por el regulador mediante los informes de referencia ni por la Resolución objeto de impugnación, ya que de acuerdo a los argumentos de este acto administrativo bastaría que exista una urbanización, sector o servicio en la zona de Concesión de ELECTROPAZ que se encuentre fuera del área de operación de EMPRELPAZ y que esté siendo atendida por esta empresa para que la reclamación de controversia incoada por ELECTROPAZ sea declarada como fundada y en consecuencia probadas las infracciones tipificadas en los incisos a) y af) del Artículo 22 del RIS.

Posteriormente, a través del memorial presentado por la recurrente el 28 de diciembre de 2009, la recurrente complementa el argumento expuesto, indicando que no existe una "zona de sobreposición" sino una zona de Concesión exclusivamente otorgada a ELECTROPAZ por el Estado que ha sido legal y arbitrariamente avasallada por EMPRELPAZ. Asimismo, indica nuevamente que la mencionada urbanización Bautista Saavedra UVC se encontraría fuera de la supuesta zona de sobreposición; es decir, fuera de la actualización del área de operación de EMPRELPAZ, por lo que aún en el extremo de admitirse una inexistente zona de sobreposición, EMPRELPAZ se encontraría invadiendo flagrantemente un derecho otorgado por el Estado a ELECTROPAZ.

Sobre el particular, es necesario considerar el contenido del informe AE DPT N° 123/2010 de 08 de marzo de 2010 de la Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones, que analizó ambos memoriales presentados por la recurrente (de 14 y 28 de diciembre de 2009) y las conclusiones de la inspección administrativa realizada, a través del cual confirma que la línea eléctrica inspeccionada en la urbanización Bautista Saavedra UVC y que fue observada por ELECTROPAZ, es parte y se encuentra dentro del área de sobreposición, en consecuencia, el argumento expuesto por la recurrente no corresponde.

Que, por todo lo señalado anteriormente, se evidencia que ELECTROPAZ, a través del recurso de revocatoria interpuesto contra la Resolución AE N° 287/2009 de 23 de noviembre de 2009, mediante memorial de 14 de diciembre de 2009, ratificado y complementado

**RESOLUCIÓN AE N° 071/2010
TRÁMITE N° 351**

La Paz, 15 de marzo de 2010

mediante memoriales de 28 de diciembre de 2009 y de 08 de febrero de 2010, no ha desvirtuado los alcances y determinaciones de la mencionada Resolución objeto de impugnación.

Que, por otra parte, es importante considerar que de acuerdo al Artículo 56 de la LPA, los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, siempre que dichos actos administrativos a criterio de los interesados *afecten, lesionen o pudieran causar perjuicio a sus derechos subjetivos e intereses legítimos*. Sobre el particular, se advierte que la empresa recurrente, durante el proceso de atención del recurso de revocatoria interpuesto contra la señalada Resolución, no ha demostrado que la misma haya afectado, lesionado o perjudicado sus derechos subjetivos e intereses legítimos, únicamente ha argumentado la procedencia de aplicación de infracciones a EMPRELPAZ, su supuesto derecho preferente sobre el Distrito 7 de la ciudad de El Alto y la supuesta invasión de esta empresa a esta área que formaría parte de su zona de concesión, empero no ha demostrado que la Resolución impugnada haya afectado, lesionado o causado perjuicio a sus derechos subjetivos e intereses legítimos.

Que, por tanto, corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por ELECTROPAZ contra la Resolución AE N° 287/2009 de 23 de noviembre de 2009, debiendo en consecuencia confirmarse el acto administrativo impugnado.

CONSIDERANDO: (Argumentos expuestos por EMPRELPAZ)

Que, como se señaló anteriormente, EMPRELPAZ remitió la nota EMPZ G.G. 44/2010 de 19 de febrero de 2010. A través de ésta presentó una sentencia constitucional sobre la validez y eficacia de los actos administrativos y una certificación expedida por la AE en la que se establece que en el Auto con registro N° 4819 de 27 de diciembre de 2006, emitido por la ex Superintendencia de Electricidad, no se encontró un Anexo propio adjunto al mismo, donde se muestre las coordenadas, vértices y el polígono de área. Evaluando esta documentación, se advierte que el contenido de la Sentencia Constitucional presentada, concuerda con el análisis efectuado anteriormente. Respecto a la certificación presentada, es preciso tener presente que este hecho fue igualmente objeto de análisis anteriormente, habiéndose determinado que toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión) es válida. Por tanto, no corresponde hacer un mayor análisis sobre la prueba aportada por EMPRELPAZ dentro del recurso de revocatoria en estudio.

Que, posteriormente, el 02 de marzo de 2010, EMPRELPAZ presentó un memorial a través del cual solicitó que se consideren sus argumentos al momento de emitir la resolución que atienda el recurso de revocatoria interpuesto por ELECTROPAZ. De la revisión de estos argumentos, se observa que EMPRELPAZ se opone a algunos fundamentos de la Resolución AE N° 286/2009, la cual corresponde a un proceso distinto al analizado en la presente Resolución Administrativa. Por otra parte, se observa que EMPRELPAZ presenta argumentos en contra de la Resolución AE N° 287/2009 objeto de impugnación, sin embargo, éstos no pueden ser considerados en mérito a que no presentó ningún recurso de

RESOLUCIÓN AE N° 071/2010, 12/13

revocatoria en contra de esta disposición administrativa y además la misma ha declarado improbadamente la comisión de infracciones de parte de esta empresa, por lo que sus derechos subjetivos e intereses legítimos no han sido lesionados. Por lo que, no corresponde analizar los argumentos expuestos en el memorial de referencia, presentado el 02 de marzo de 2010.

CONSIDERANDO: (Conclusiones)

Que, por todo lo expuesto, se concluye que corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por ELECTROPAZ, a través del memorial de 14 de diciembre de 2009, ratificado y complementado mediante memoriales de 28 de diciembre de 2009 y de 08 de febrero de 2010 contra la Resolución AE N° 287/2009 de 23 de noviembre de 2009, en atención a que la empresa recurrente no demostró que la misma haya afectado, lesionado o causado perjuicio a sus derechos subjetivos e intereses legítimos; consiguientemente corresponde debe confirmar en todas sus partes el acto administrativo impugnado.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por las disposiciones legales vigentes

RESUELVE:

ÚNICO.- Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por Miguel A. Arduz en representación de la empresa Electricidad de La Paz S.A. (ELECTROPAZ), mediante memorial de 14 de diciembre de 2009, ratificado y complementado mediante memoriales de 28 de diciembre de 2009 y de 08 de febrero de 2010, contra la Resolución AE N° 287/2009 de 23 de noviembre de 2009, en atención a que la recurrente no demostró que la misma haya afectado, lesionado o causado perjuicio a sus derechos subjetivos e intereses legítimos; consiguientemente, confirmar en todas sus partes el acto administrativo impugnado.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Nelson Caballero Vargas
DIRECTOR EJECUTIVO

Es conforme:



Luis Adolfo Ormachea M.
DIRECTOR LEGAL a.i.

RESOLUCIÓN AE N° 071/2010, 13/13